

Antofagasta, a catorce de febrero de dos mil veinticinco.

**VISTOS:**

En estos autos sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios por la responsabilidad civil por falta de servicio, seguido ante el Primer Juzgado de Letras de esta ciudad, en causa rol C-1362-2021, caratulado "ARAVENA/AROS", por sentencia de primera instancia de fecha once de abril de dos mil veinticuatro, dictada por el juez titular don Arturo Andrés Iribarren Pérez, se declara lo siguiente:

*"I.- SE RECHAZA la tacha deducida por la demandada respecto del testigo Juan Pablo Galdames Ávalos formulada a folio 76.*

*II.- SE RECHAZA la excepción de prescripción de la acción resarcitoria, opuesta en la contestación de la demanda.*

*III.- SE ACOGE parcialmente la demanda deducida en lo principal del escrito de folio 1, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile, a pagar a las demandantes, las siguientes cantidades dinerarias:*

*a) A doña Aleksandra Katarina Rendic Vargas, por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral, la suma de \$45.000.000.- (cuarenta y cinco millones de pesos).*

*b) A doña Cecilia Vargas Estay, por el ítem de daño emergente, la cantidad de \$5.942.119.- (cinco millones novecientos cuarenta y dos mil ciento diecinueve pesos) y a la suma de \$8.000.000.- (ocho millones de pesos) por concepto de daño moral.*

*IV.- Las sumas antes referidas deberán liquidarse en su oportunidad, aplicándose los reajustes e intereses que correspondan entre la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia y la de su pago efectivo.*

*V.- Se rechaza la demanda en cuanto a lo demás solicitado por concepto de daño emergente y daño moral.*



*VI.- No se condena en costas a la parte demandada, por no haber resultado completamente vencida en juicio."*

En contra de esta decisión se alzó la parte demandada deduciendo recurso de apelación solicitando revocar la sentencia en cuanto rechazó la excepción de prescripción de la acción y, en su lugar, acogerla y rechazar la demanda o, en subsidio, rechazar la demanda al no haberse acreditado, la responsabilidad del Fisco de Chile; o, en subsidio, se le condene solo al pago del daño efectivamente causado, o una suma considerablemente inferior que fije la Corte de Apelaciones, eximiéndolo del pago de las costas.

Por su parte, la demandante también dedujo apelación, solicitando confirmar la sentencia con declaración que se eleva la suma fijada por concepto de indemnización por daño moral a la cantidad ascendente a \$100.000.000 para su representada Aleksandra Rendic, y a la suma de \$40.000.000.- para su representada Cecilia Vargas, o a la suma que la Corte de Apelaciones determine.

Se ordenó traer los autos en relación y se procedió a la vista de la causa, alegando ambas partes.

**CONSIDERANDO:**

Dando por reproducida la sentencia en alzada, salvo el considerando décimo cuarto que se elimina.

**Y TENIENDO, ADEMÁS Y EN SU LUGAR PRESENTE:**

**PRIMERO:** Que el primer punto a resolver en este caso es si se reúnen los presupuestos para declarar la prescripción de la acción deducida.

**SEGUNDO:** Que, al respecto, cabe considerar que los hechos asentados pertinentes para resolver el punto antes indicado son los siguientes:

1.- El hecho que se indica produjo el daño demandado, la agresión a la demandante Aleksandra Katarina Rendic Vargas por un funcionario de Carabineros, siendo la madre de aquella la demandante Cecilia Vargas Estay, tuvo lugar el día 1° de



julio de 2017, circunstancia en la que están contestes las partes.

2.- Con la piezas de la causa penal acompañadas, y no existiendo tampoco cuestionamiento al respecto, puede tenerse por establecido que por dichos hechos se tramitó la causa RIT O-7556-2017, del Juzgado de Garantía de Antofagasta, en la cual el funcionario policial fue condenado en juicio abreviado, en audiencia de preparación de juicio oral que tuvo lugar el día 12 de noviembre de 2019, como autor del delito consumado de apremios ilegítimos y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, previsto y sancionado en el artículo 150 letra d) del Código Penal, en la cual era querellante el Instituto Nacional de Derechos Humanos y en que compareció como víctima doña Aleksandra Katarina Rendic Vargas, quienes se adhirieron a la acusación en su momento sin deducir demanda civil, sin que se haya acreditado haber solicitado alguna diligencia para preparar la acción civil y sin que se haya solicitado medida cautelar real.

3.- El día 26 de mayo de 2021 se dedujo demanda civil, indicando expresamente que se tramita conforme al juicio de hacienda, solicitando se condene al Fisco de Chile por haber incurrido en falta de servicio, solicitando indemnizar los perjuicios patrimoniales y morales sufridos por la víctima y su madre, quien además pagó los costos médicos, sustentando su acción en el hecho que el funcionario policial fue condenado por la agresión que ella sufrió.

4.- Frente a dicha presentación, considerando que se deduce demanda en juicio de hacienda, pero se sustenta aquella en condena penal del funcionario policial, el Tribunal solicita aclarar varias cuestiones, entre ellas conforme a que procedimiento se solicita tramitar la acción.

5.- El día 31 de mayo del mismo año, la actora aclara la demanda, indicando que el procedimiento por el cual se solicita tramitar la demanda de autos es el procedimiento



sumario, en conformidad a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 680 del Código de Procedimiento Civil, adjuntando la sentencia penal respectiva.

6.- En base a aquello el tribunal con fecha 4 de junio de 2021 cita a audiencia de contestación y conciliación, después de haber ordenado tramitar la causa conforme al procedimiento sumario.

7.- La parte demandada fue notificada de la demanda presentada y modificada, según se dijo, el día 24 de enero de 2022.

8.- El día 25 de enero de 2022 la parte demandante presenta escrito en que, indica, rectifica la demanda de autos, agregando fundamentos de hecho y de derecho a los ya expuestos, transcribiendo una nueva demanda que indica debe tramitarse conforme a las reglas del juicio sumario, solicitando que "en conformidad a lo dispuesto en el artículo 261 del Código de Procedimiento Civil, se sirva disponer la notificación de la nueva demanda al demandado conjuntamente con la notificación de la resolución que fijó nueva fecha del comparendo de contestación y conciliación para el 08 de Febrero próximo".

9.- Con fecha 28 de enero de 2022 se proveyó el escrito teniendo por rectificada la demanda en los términos señalados, y disponiendo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261 Código de Procedimiento Civil, se notifique juntamente con la demanda.

10.- Con fecha 1° de febrero de 2022 se notificó personalmente a la demandada de la demanda rectificada.

11.- El día 28 del mismo mes la demandada alegó nulidad de lo obrado argumentando la improcedencia de tramitar la causa conforme al procedimiento sumario, por ser demandante doña Cecilia Vargas y demandado el Fisco de Chile, quienes no fueron partes en la causa penal, y porque la otra demandante no presentó acción civil en dicha causa penal, debiendo



tramitarse la causa conforme a las reglas generales, es decir el juicio ordinario.

12.- La demandante se allanó a dicho incidente, disponiendo el tribunal con fecha 9 de marzo de 2022 que se anula todo lo obrado en autos, tramitándose el procedimiento de acuerdo a las normas del juicio ordinario de hacienda, proveyendo la demanda dando traslado, disponiendo notificar a la parte demandada personalmente, por un Receptor Judicial, y en caso de no ser habida y siempre que el ministro de fe efectúe las búsquedas y establezca cuál es su habitación o el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo y que se encuentre en el lugar de juicio, de lo que se dejará constancia, notifíquese en el mismo acto en la forma señalada en los incisos 2° y 3° del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, dejándose constancia que en sistema aparecerá como procedimiento sumario porque este no permite modificar, pero se tramitará conforme a las reglas del procedimiento ordinario de hacienda, pero seguirá apareciendo en sistema procedimiento sumario. Dicha resolución no fue recurrida.

13.- Con fecha 7 de abril de 2022 la demandada fue notificada de la demanda y de lo obrado en la causa, entre ello de la ampliación de la demanda.

14.- Con fecha 22 de abril la demandada contesta la demanda, oponiendo la excepción de prescripción.

**TERCERO:** Que conforme lo ha resuelto en reiteradas ocasiones la Excma. Corte Suprema, la falta de servicio, factor de imputación invocado en la demanda, se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimando que ello concurre cuando aquel no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuencia responsabilidad indemnizatoria, conforme lo dispone expresamente el artículo



42 de la Ley N°18.575, debiendo tenerse presente que la responsabilidad por falta de servicio no constituye una categoría separada de la responsabilidad regulada en el Código Civil, sino que se trata de una responsabilidad extracontractual que se regula en función de la culpa del servicio como criterio de imputación.

Así las cosas y conforme a lo dispuesto en el artículo 2332, la acción que persigue dichas indemnizaciones prescribe en el plazo de cuatro años.

Dicho lo anterior la pregunta a responder si se logró completar dicho plazo desde los hechos generadores de responsabilidad, que tuvieron lugar el día 1° de junio de 2017, o, si por el contrario las demandantes interrumpieron civilmente la prescripción antes de concretarse la misma, que es lo alegado por dicha parte (no se alega ni aparece que existiese interrupción natural de la prescripción).

**CUARTO:** Que la regla general en materia de interrupción de la prescripción extintiva está establecida en el artículo 2518 inciso final, en relación al artículo 2503, ambos de Código Civil, en virtud de lo cual la jurisprudencia mayoritaria sostiene que la interrupción tiene lugar con la notificación de la demanda que persigue dicha responsabilidad, lo que en la especie, cualquiera sea la notificación que se considere, tuvo lugar después de transcurrido dicho plazo, por lo que, en principio, si acudimos a la regla general, debiera acogerse la excepción.

**QUINTO:** Que un segundo punto a tener en cuenta es que considerando que la demandante Cecilia Vargas Estay, eventual perjudicada no víctima del delito (no es titular del bien jurídico protegido por el delito que se emitió condena en sede penal), y la demandada, no fueron parte del procedimiento penal y que la demandante víctima del delito no presentó demanda civil en la oportunidad legal correspondiente en el juicio penal, que fallada la causa



penal el día 27 de noviembre de 2019, transcurrió un año y medio hasta la presentación de la demanda civil y, en todo caso, en la causa penal no se realizó acción alguna que tuviere por objeto preparar la acción civil, considerando lo dispuesto en los artículos 60, 61 y 68 del Código Procesal Penal, sólo cabe concluir que lo obrado en sede penal no interrumpió en definitiva el plazo de prescripción extintiva de la acción civil.

**SEXTO:** Que, dicho lo anterior, el tema se reduce a determinar si conforme a la legislación aplicable en tiempo de estado de excepción constitucional por pandemia, y considerando que la demanda además fue modificada, logró la parte demandante interrumpir dicha prescripción antes de cumplirse el plazo.

Al respecto el artículo 8° inciso primero de la ley 21.226, dispuso que *"durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, se entenderá interrumpida la prescripción de las acciones por la sola presentación de la demanda, bajo condición de que esta no sea declarada inadmisibile y que sea válidamente notificada dentro de los cincuenta días hábiles siguientes a la fecha del cese del referido estado de excepción constitucional, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, o dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que la demanda fuere proveída, lo que suceda último."*

Por su parte el artículo 11 de la ley 21.226, que fuera introducido por la Ley 21.379, de fecha 30 de septiembre de 2021, dispuso que *"A excepción de los artículos 4 y 6, en cada una de las demás disposiciones de la presente ley en que se refiere a la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública declarado*



*por decreto supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y al tiempo en que éste sea prorrogado ha de entenderse que las respectivas reglas refieren al término que se extiende hasta el 30 de noviembre de 2021".*

Por último, el artículo 261 del Código de Procedimiento Civil dispone que "notificada la demanda a cualquiera de los demandados y antes de la contestación, podrá el demandante hacer en ella las ampliaciones o rectificaciones que estime convenientes.

*Estas modificaciones se considerarán como una demanda nueva para los efectos de su notificación, y sólo desde la fecha en que esta diligencia se practique correrá el término para contestar la primitiva demanda".*

**SÉPTIMO:** Que, frente a dicho régimen normativo, cabe tener presente que habiendo tenido lugar el hecho que genera la responsabilidad el 1° de junio de 2017, la demanda de autos fue presentada el día 26 de mayo de 2021, siendo proveída con fecha 4 de junio de 2021, y notificándose con fecha 24 de enero de 2022.

Así las cosas, considerando que el plazo de prescripción no estaba vencido al día del inicio de la vigencia de la Ley 21.226, conforme a su artículo 8° cabe concluir que bastaba con presentar la demanda dentro del plazo de prescripción para interrumpirlo, lo que ocurrió en la especie días antes de vencer los cuatro años, por lo que debe analizarse la situación para ver si en este caso se realizó la notificación dentro del plazo que la misma norma indica, siendo esto efectivo, desde que la demanda fue notificada al día hábil 44 contado desde que debe tenerse por terminado el estado de excepción para estos efectos procesales, el que, conforme al ya transcrito artículo 11, debe entenderse que se extendió hasta el 30 de noviembre de 2021.





**NOVENO:** Que si bien con posterioridad al vencimiento del estado de excepción, tanto desde la fecha del término real del mismo, como de aquella que debe considerarse para contabilizar los plazos del artículo 8°, y una vez ya notificada la demanda, se presentó una modificación a la demanda, que conforme a lo dispuesto en el indicado artículo 261 debe tenerse como una nueva demanda (lo que significa en principio perder los efectos de la primera demanda como de su notificación posterior, como asimismo dejar de ser aplicable las normas de excepción antes indicadas, lo cierto es que a petición de la propia demandada, y por resolución no recurrida, el tribunal declaró la nulidad de todo lo obrado, retrotrayendo la causa al estado de proveer la demanda, sin afectar la presentación de la misma, procediendo acto seguido a proveer la demanda dando traslado, lo que deja sin efecto la resolución que declaró admisible la demanda inicialmente, como asimismo aquella que tuvo por ampliada la demanda, e incluso las notificaciones de la misma ya realizadas, disponiendo notificar nuevamente en forma personal, con lo que puede tenerse por asentado que la demanda presentada con fecha 26 de mayo de 2021, en estado de excepción y antes de cumplirse los cuatro años de prescripción extintiva, fue proveída con fecha 9 de marzo de 2022, declarándose admisible y otorgando traslado, y al notificarse el día 7 de abril de 2022, esto es con menos de treinta días desde que se declaró admisible, se completaron las exigencias de los artículos 8 y 11 referidos para interrumpir la prescripción, por lo que no incurre en error la sentencia al declararlo así, no cabiendo sino rechazar la excepción de prescripción.

Cabe tener presente, por último, que al anularse la resolución fecha 4 de junio de 2021 y la notificación de fecha 24 de enero de 2022, la ampliación a la demanda se presentó cuando aún no estaba notificada la demanda y, por lo



mismo, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 261 antes referido.

**DÉCIMO:** Que en cuanto a las demás alegaciones que sobre el punto desarrolla la demandada, cabe tener presente que la nulidad procesal sólo puede afectar las resoluciones y actuaciones judiciales, no así los escritos de las partes que son simples peticiones, por lo que la demanda original no fue afectada por la nulidad y, es más, acto seguido a declarar la nulidad, se procede a proveer la demanda.

**UNDÉCIMO:** Que en relación con el segundo cuestionamiento del recurso de la demandada, en que se indica que la conducta desplegada por Cerda Tapia no constituye falta de servicio, ni tampoco falta personal de la cual deba responder el Estado, porque esa conducta es material, intelectual y psicológicamente separable de su función, en lo material, porque el comportamiento de dicho sujeto no solamente es ajeno sino contradictorio, como se dijo, con la actividad o función asignada, cabe tener presente que el recurso en sí ya es contradictorio porque por otro lado indica que "las consecuencias lesivas denunciadas por la recurrente, no son sino, en el marco de un acto legítimo de autoridad como acontece en el control de identidad al cual se negó la demandante y es más, intento evadirlo", aseveración esta última que devuelve la acción reprochada dentro de la esfera del cumplimiento de las funciones públicas.

**DUODÉCIMO:** Que, a este respecto, cabe señalar que tal como se establece en la sentencia impugnada, a causa del mal funcionamiento del servicio público ha quedado establecida la falta de servicio, como circunstancia de imputación de responsabilidad civil, toda vez que se acreditó negligencia en el actuar de Carabineros de Chile, no sólo por la agresión desproporcionada y sin razón efectuada por el funcionario que fue condenado penalmente, sino por la omisión de los demás Carabineros que estaban en el lugar, quienes permitieron la



agresión al no realizar nada para evitarlo, no obstante la obligación que tiene de tratar de impedir la comisión de ilícitos, en este caso la agresión que realizaba un compañero de trabajo fuera de todo protocolo, lo que constituye la deficiencia en el funcionamiento de la seguridad y protección de las personas, y en especial de aquellas detenidas o sometidas a control de identidad, lo que implica un cumplimiento deficiente de sus obligaciones por el servicio público y sus agentes, los funcionarios públicos que lo integran, a raíz de lo cual ocurrió el hecho dañoso del cual deriva el perjuicio sufrido por las demandantes.

Para que se configure en la especie la responsabilidad por falta de servicio es necesaria la concurrencia copulativa de los siguientes elementos: a) la existencia de una acción u omisión del servicio público o de sus agentes o funcionarios con infracción a los estándares establecidos en el ordenamiento jurídico, tanto las contempladas en el inciso 1° del artículo 6 de la Constitución Política de la República, así como en la normativa que rige a Carabineros, que permitió sustentar la condena penal en contra del funcionario agresor, y permite calificar de omisión la inactividad de los demás funcionarios para impedir el obrar ilícito de su compañero de armas; b) la existencia de daño a las demandantes, que parte del hecho objetivo que la víctima del delito sufrió fractura; y, c) la existencia de un vínculo de causalidad entre la actuación negligente del órgano de la Administración y el daño a las demandantes, siendo claro que los daños demandados, de existir, derivan del ilícito que sustenta la demanda.

Que la imputación de negligencia que se atribuye a la institución a cargo de la custodia y seguridad de quienes son objeto de un procedimiento policial, consiste en una falta de servicio, en cuanto a la custodia y seguridad de la víctima del delito.



**DECIMOTERCERO:** Que en cuanto a la aseveración que las consecuencias lesivas denunciadas por la denunciante, no son sino, en el marco de un acto legítimo de autoridad como acontece en el control de identidad al cual se negó la demandante y es más, intentó evadirlo, mientras los funcionarios eran agredidos por otras personas en el lugar, reconocido que es en la misma apelación (también en la defensa) el exceso, que en todo caso incluso fue calificado de delito, es claro que la práctica de estas diligencias policiales no justifican tan graves excesos, inclusive constitutivos de delito como se asienta en la causa penal, como tampoco la omisión de todos los demás funcionarios, que nada hicieron para detener la agresión, a lo que estaban obligados, desde que frente a la existencia de un delito deben actuar para tratar de impedirlo y, por el contrario, nada hicieron.

Por lo expuesto, respecto de este segundo cuestionamiento, debe también rechazarse el recurso.

**DECIMOCUARTO:** Que, por último, se solicita en la apelación de la demandada, rebajar el monto de la indemnización, pero respecto de este punto el escrito del recurso carece de toda alegación, lo que hace que el mismo carezca de fundamento y, conforme al artículo 189 inciso primero, debe ser desestimada.

**DECIMOQUINTO:** Que, en relación a la apelación de la demandante, esta tiene como petición concreta sólo aumentar el monto fijado como indemnización por daño moral, indicando que no se consideró que su representada tuvo que viajar a Santiago para practicarse las cirugías, los periodos de hospitalización, el hecho de haber dejado sus estudios durante sus tratamientos, el real dolor sufrido por el actuar doloso del ex carabinero Cerda, dado que no sólo sufrió la rotura de diversas partes de su pierna izquierda, sino que además injustificadamente vio aumentado el dolor por la



detención practicada, ser mantenida en el suelo con una pierna sobre su espalda del mismo funcionario policial, no siendo llevada inmediatamente a un establecimiento asistencial, para luego mantenerla detenida en esas circunstancias en la comisaría, sin apreciarse para dicho fin las fotografías y videos que se acompañaron a la causa, que tampoco se considera que su representada resultó con secuelas permanentes del hecho dañoso como lo es la existencia de tornillos en su pierna para unir el peroné y reconstruir su rodilla, y que no se considera debidamente el dolor y sufrimiento vivido por su representada y su madre, quien la acompañaba en sus viajes a Santiago para el tratamiento, la pérdida de la calidad de vida y de la alegría normal de la vida cotidiana durante el largo tiempo de su recuperación física como psicológica, la separación del entorno familiar y amistades durante sus tratamientos en Santiago, como la privación temporal de actividades personales o pérdidas de bienestar habituales de las actoras en su hogar en Antofagasta.

**DECIMOSEXTO:** Que, lo primero para tener en cuenta es que después de indicar qué elementos faltó considerar, la apelación solicita un monto determinado sin ningún análisis que permita arribar necesariamente al monto requerido, efectuando un salto lógico en su argumentación, que no permite entender en concreto sus razones para arribar a ese monto, lo que hace el recurso infundado y, conforme al referido artículo 189, debe desecharse el mismo.

**DECIMOSÉPTIMO:** Que, sin perjuicio de aquello, de una lectura global de los considerandos a vigésimo sexto a vigésimo octavo, cabe tener presente que la sentencia sí tuvo en consideración los parámetros que se dicen fueron omitidos, pues considera las complejidades del tratamiento y las limitaciones que esto impuso a la víctima del delito y a su madre, en especial las hospitalizaciones, su afectación a las



demás actividades de ambas, el dolor sufrido, y si bien no se hace alusión a los alegadas secuelas permanentes, más estas no parecen ser tales conformes a los antecedentes médicos allegados a la causa, no apreciándose que por los viajes a Santiago significaran un aumento del dolor.

**DECIMOCTAVO:** Que, por otro lado, no se aprecia esté acreditado algún antecedente objetivo distinto a los considerados en la sentencia que lleva a la evaluación monetaria del daño como insuficiente.

**DECIMONOVENO:** Que, por último, y en cuanto a la determinación del daño moral, cabe tener presente que, como bien lo indica el profesor Pablo Rodríguez, después de sostener que la tasación objetiva del daño moral resulta imposible por la naturaleza del agravio y de la lesión, por afectar un interés que se sitúa en la esfera de los sentimientos más íntimos de una persona, la indemnización por daño moral apunta a procurar un equilibrio de otra naturaleza, un bienestar que mitigue lo irreparable, un placer que permita aliviar lo que no tiene solución (Responsabilidad Extracontractual, pág. 338). En el mismo sentido la profesora Carmen Domínguez señala que la regla orientadora de toda indemnización debe ser el de la reparación integral del perjuicio, esto es, la indemnización no debe ser insuficiente y excesiva, debe ser una reparación razonable entendiéndola como una compensación (El Daño Moral, tomo II, pág. 703).

Considerando lo anterior, y a la luz de los parámetros que se tienen habitualmente en cuenta por la jurisprudencia, considerando el evidente sufrimiento que un hecho como el ocurrido afecta la situación emocional de la víctima de tan alevosa agresión y la carga emocional que conlleva su recuperación, como asimismo el sufrimiento de la madre al ver el dolor y limitaciones de su hija y la renuncia a actividades propias para dedicarse a su cuidado, debe



valorarse aquello para determinar el monto que lo compense razonablemente y, sin dudas, siendo el sufrimiento proveniente del acto culposo (para la demandada) muy relevante, en tanto las actoras sufrieron evidente y relevante dolor físico la primera y dolor emocional derivado del anterior y por las circunstancias que rodearon toda la etapa posterior, sufrimiento claramente establecido por el peritaje acompañado, conforme lo asienta la sentencia en argumentos que esta Corte comparte, debe concluirse que necesariamente las actoras sufrieron dolor y desazón que debe ser compensado, compartiendo esta Corte con la sentencia que aquello se compensa con la suma fijada prudencialmente en la misma, suma que otorgará un bienestar alternativo que permita mitigar el sufrimiento, logrando la reparación integral del daño, y considerando además que por la actora no se rindió alguna otra prueba que permita estimar que el daño moral fue mayor, siendo relevante que el sufrimiento de la madre es indirecto y no deriva de dolor físico, lo que explica la diferencias de montos, por lo que se desechará la apelación a este respecto también.

**VIGÉSIMO:** Que, por último, rechazados que fueron los recursos de ambas partes, no se les condenará en costas del recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 144, 160, 170, 186, 187, 223 y 227, del Código de Procedimiento Civil, se declara que **SE CONFIRMA, sin costas de los recursos**, la sentencia apelada de fecha once de abril de dos mil veinticuatro, dictada en causa rol C-3259-2019 del Primer Juzgado de Letras de esta ciudad.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad conferida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y comuníquese.



**Rol 553-2024 (Civil)**

Redacción del ministro titular don Juan Opazo Lagos.

No firman las ministras titulares Virginia Soublette Miranda y Jasna Pavlich Núñez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo por encontrarse la primera con permiso y la segunda, con licencia médica.





Proveído por el Señor Presidente de la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta.

En Antofagasta, a catorce de febrero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HJVXXSXHSSU